

COMUNICADO

En el marco del brutal asesinato a Susana Montoya y las amenazas de muerte a su hijo Fernando Alvareda, que alcanzan también a sus hijos, nietos de Susana y a todo el grupo familiar de la víctima, desde HIJES Alto Valle nos pronunciamos declarando que hasta que no se demuestre lo contrario no podemos considerar estos hechos como otra cosa que un crimen de odio político contra todo el colectivo de víctimas, familiares y sobrevivientes del terrorismo de estado y contra todos los sectores de la sociedad comprometidos con la construcción de una Argentina verdaderamente democrática en el que el Nunca Más sea un compromiso vigente para todas y todos y especialmente para la dirigencia política con responsabilidades institucionales.

Tampoco podemos dejar de señalar la responsabilidad que le cabe al poder judicial de Córdoba, encabezado por el Ministro Julián López y a las fuerzas provinciales que dirige el Ministro de Seguridad Juan Pablo Quintero por la falta de resultados en la investigación de las amenazas recibidas por nuestro compañero Fernando Alvareda por su pertenencia al colectivo de HIJOS y su trabajo como capacitador en Derechos Humanos en la Escuela de Policía de Córdoba, las cuales fueron denunciadas en diciembre del año pasado pero a la fecha no se han identificado responsables ideológicos o materiales de esos hechos gravísimos que sin embargo palidecen ante el crimen que hoy tenemos que lamentar.

Estamos convencidos de que si el poder judicial y el ministerio de seguridad de Córdoba hubiesen actuado a la altura de sus responsabilidades de garantizar los derechos y la integridad de Fernando Alvareda tal vez hoy no estaríamos lamentando el crimen cobarde de su madre, asesinada

brutalmente a los 74 años de edad ni temiendo por la seguridad de nuestro compañero y los seres queridos que le quedan. La dictadura le arrebató a su padre, el odio político propagado por el actual gobierno nacional acaba de quitarle a su madre y él y sus hijos corren peligro de muerte de acuerdo a las amenazas que dejaron los asesinos en el lugar del crimen. La Justicia de Córdoba no tiene margen para actuar tibiamente y debe destinar todos los esfuerzos necesarios para esclarecer de manera urgente estos hechos de gravedad inusitada.

No obstante lo cual, también tenemos que señalar la responsabilidad que le cabe al Presidente Javier Milei, a su vicepresidenta Victoria Villarruel y a todo el gabinete nacional, con especial énfasis en la Ministra de seguridad Patricia Bullrich, el Ministro de Defensa Luis Petri y el vocero presidencial con rango de Secretario de Estado Manuel Adorni en la propagación cotidiana y sostenida de discursos de descalificación y estigmatización de las víctimas del terrorismo de estado, de banalización de la lucha de los organismos de derechos humanos y de reivindicación de los genocidas condenados, al extremo de organizar visitas de representantes legislativos a las unidades de detención de quienes cometieron los más terribles crímenes de lesa humanidad de la historia argentina para recibir instrucciones y preparar proyectos que les devuelvan la impunidad que les quitó la lucha de toda la sociedad argentina representada en la consigna Nunca Más.

Son sus arengas constantes en favor de los represores y su relativización del sufrimiento de quienes padecemos el accionar de los grupos de tareas, quienes perdimos familiares en los centros clandestinos de detención y fuimos apropiados por los asesinos de nuestros padres para arrebatarnos además de nuestra familia el legado de nuestra identidad las

que están creando las condiciones para el regreso de la violencia política que la sociedad argentina logró erradicar con años de lucha y compromiso para construir un país democrático y en paz. Su desprecio por el diálogo y la soberbia que los lleva a expresarse como manifestación de la verdad absoluta resumida en su idea de responder a “las fuerzas del cielo” nos están arrastrando a una espiral de agresión y violencia que debe poner en alerta a todas y todos quienes soñamos con vivir en una nación en paz, independientemente de nuestras identidades políticas y partidarias individuales.

Por todo esto, desde HIJES Alto Valle:

***EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO URGENTE DEL ASESINATO DE SUSANA MONTOYA Y LA CONDENA DE TODOS LOS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES DEL CRIMEN Y DE LAS AMENAZAS RECIBIDAS PREVIAMENTE POR NUESTRO COMPAÑERO FERNANDO ALVAREDA.**

***EXIGIMOS TAMBIÉN QUE SE GARANTICE DE MANERA INMEDIATA LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD DE FERNANDO ALVAREDA Y DE SU FAMILIA, SEÑALADA TAMBIÉN COMO OBJETIVO DE LOS CRIMINALES ENSAÑADOS CON NUESTRO COMPAÑERO POR SU ACTIVA MILITANCIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

***RESPONSABLIZAMOS AL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN LA FIGURA DEL PRESIDENTE JAVIER MILEI, LA VICEPRESIDENTA VICTORIA VILLARRUEL, LA MINISTRA PARTICIA BULLRICH, EL MINISTRO LUIS PETRI Y EL SECRETARIO DE ESTADO MANUEL ADORNI POR CUALQUIER NUEVA AGRESIÓN QUE PUEDA SUFRIR LA FAMILIA ALVAREDA O CUALQUIER PERSONA POR SU CONDICION DE INTEGRANTE DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE AQUÍ EN ADELANTE**

*CONVOCAMOS DE MANERA URGENTE A TODA LA SOCIEDAD A EXPRESARSE Y REPUDIAR EL INTENTO DE SUMERGIR UNA VEZ MÁS A LA ARGENTINA EN LA ZOZOBRA DE LA VIOLENCIA, ORGANIZANDOSE Y MANIFESTANDO QUE EN ARGENTINA LOS CRIMENES DE ODIO POLÍTICO NO PUEDEN TENER LUGAR NUNCA MÁS.